

**HONDURAS**  
**INFORME DE PAÍS SOBRE LAS PRÁCTICAS DE DERECHOS HUMANOS 2005**  
**Emitido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo**  
**8 de marzo de 2006**

Honduras es una democracia constitucional, con una población de aproximadamente siete millones de habitantes. En las elecciones nacionales de noviembre, consideradas por los observadores internacionales y nacionales como generalmente libres y justas, los votantes eligieron como presidente a José Manuel Zelaya Rosales del Partido Liberal. Mientras que las autoridades civiles generalmente mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo instancias en donde elementos de las fuerzas de seguridad, en particular de la policía, actuaron en forma independiente de la autoridad gubernamental.

La corrupción gubernamental, la impunidad para los transgresores de la ley, y la violencia de pandillas exacerbaron los serios problemas de derechos humanos en algunas áreas. Se reportaron los siguientes problemas de derechos humanos:

- ejecuciones extrajudiciales por miembros de la policía
- ejecuciones arbitrarias y sumarias cometidas por elementos clandestinos y ex miembros de las fuerzas de seguridad
- golpizas y otros abusos en contra de detenidos cometidos por las fuerzas de seguridad
- condiciones crueles en las prisiones
- impunidad para las violaciones de derechos humanos
- fracaso de las autoridades en la aplicación de la ley
- prolongados períodos de detención previos al juicio
- falta de financiamiento gubernamental, debilidad institucional, y corrupción judicial
- cateos ilegales
- erosión de la libertad de prensa
- violencia y discriminación contra la mujer
- prostitución infantil
- abuso infantil
- trata de personas
- discriminación contra personas indígenas
- discriminación contra personas debido a su orientación sexual
- falta de una efectiva aplicación de las leyes laborales
- trabajo infantil

## RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1 El Respeto por la Integridad de la Persona, Incluyendo la Libertad de:

### a. Privación Arbitraria o Ilegal de la Vida

A pesar de que el gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato motivado por razones políticas, miembros de fuerzas de seguridad fueron declarados sospechosos de estar involucrados directamente en asesinatos extrajudiciales, arbitrarios y sumarios. Como ha sucedido en años anteriores, organizaciones no gubernamentales (ONGs) reportaron asesinatos de jóvenes y niños por grupos clandestinos que podrían haber incluido la participación de miembros de las fuerzas de seguridad (ver la Sección 5). No se han presentado acusaciones o se ha condenado a persona alguna en relación con tales presuntos asesinatos. La ONG Casa Alianza reportó que entre 1998 y octubre, 2,879 niños y jóvenes menores de 23

años habían sido asesinados, y afirmó que fuerzas de seguridad gubernamentales estaban posiblemente implicadas en 9 de esos asesinatos.

Las autoridades buscaron o detuvieron a una cantidad de oficiales de policía por su participación en los asesinatos de varias personas (ver la Sección 5).

A finales de año, no hubo progreso, y no se esperaba que hubiese alguno, con relación a la decisión de una Corte de Apelaciones de declarar inocentes al oficial de policía Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y a otros tres oficiales por un asesinato extrajudicial ocurrido en 2002.

Hubo cierta cantidad de muertes de prisioneros causadas por miembros de las fuerzas de seguridad (ver la Sección 1.c.).

No hubo progreso, y no se esperaba que hubiese alguno, en la investigación del asesinato de Eric David Yanez, una persona transexual, quien supuestamente fue asesinado por dos oficiales de policía en 2003 (ver la Sección 5).

El 30 de agosto, asaltantes desconocidos secuestraron y asesinaron a José Mario García, director de recursos humanos del Ministerio de Obras Públicas y ex candidato a diputado en las elecciones primarias por el Partido Nacional. La investigación estaba pendiente a finales de año.

El 11 de septiembre, personas desconocidas le dispararon y asesinaron a Francisco Cruz Galeano, un dirigente sindical miembro de la Confederación General de Trabajadores (CGT) en Ojo de Agua. No se determinó si el asesinato de Cruz estaba relacionado con su actividad sindical. La investigación estaba pendiente a finales de año.

El 2 de octubre, dos personas desconocidas le dispararon y asesinaron a René Arturo Madrid Chinchilla, presidente del Consejo Local del Partido Liberal en Tegucigalpa. A finales de año, la policía cerró el caso, determinando que había sido un asalto.

A finales de año, continuaba pendiente la investigación del asesinato del candidato a diputado al Congreso por la Democracia Cristiana, Luis Armando Genawer Paguada, quien fue asesinado en diciembre de 2004 por supuestos pandilleros.

No hubo novedades, y no se esperaba ninguna, en el asesinato del activista ambiental Carlos Arturo “Óscar” Reyes, quien fue ultimado por criminales desconocidos en 2003.

A finales de año, se encontraba pendiente la acusación contra Marco Tulio Vásquez Juárez por el asesinato de José Daniel Chinchilla Lara, Vicepresidente de La Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras en 2003.

Arlin Daniel Escobar Moli permaneció bajo arresto y su caso se encontraba pendiente por el asesinato del Padre Guillermo Antonio Salgado en 2003.

A finales de año, la policía no había arrestado a ningún sospechoso con relación al asesinato del candidato a diputado por el Partido Nacional Ángel Pacheco León en 2001. Sin embargo, el 16 de septiembre, el cuerpo de Pacheco fue exhumado para realizar un análisis de ADN como parte del proceso de investigación. Debido a la descomposición del cuerpo, no se obtuvieron resultados definitivos. A finales

de año, la familia de Pacheco y organizaciones internacionales continuaron presionando al gobierno para intensificar sus esfuerzos para resolver el caso.

En 2004, el gobierno aceptó su responsabilidad en relación a los abusos de derechos humanos cometidos durante la década de los ochenta y prometió cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a estos asesinatos. Durante el año, algunos militares y oficiales policiales activos y retirados continuaron enfrentando cargos criminales por abusos de derechos humanos, incluyendo el asesinato de 184 personas en los ochentas. A pesar que la mayor parte de los acusados fueron procesados por el Ministerio Público por los delitos de detención ilegal y asesinato, a finales de año, el Ministerio Público continuaba sin poder presentar nuevos casos contra estas personas, incluyendo a miembros del desaparecido batallón de inteligencia militar 3-16 (ver la Sección 1.b.).

Durante el año, hubo varias exhumaciones de tumbas clandestinas de personas que presumiblemente fueron asesinadas en los ochentas, pero a finales de año, los restos no habían sido positivamente identificados. Organizaciones de derechos humanos continuaron buscando información utilizando contactos en organizaciones de base para localizar otras tumbas clandestinas para futuras exhumaciones para poder progresar en algunos casos contra presuntos violadores de derechos humanos. Por ley, los juzgados no aceptan los casos en donde el cuerpo de la víctima no ha sido recuperado y debidamente identificado. Cuando se identifica un cuerpo, ello permite que sus familias y las organizaciones de derechos humanos puedan presentar un caso ante los juzgados en donde pudo haber abuso de derechos humanos. A pesar que las investigaciones continuaban, a finales de año no se habían presentado cargos en contra de alguna persona como resultado de esas exhumaciones.

Durante el año, no hubo novedades, y no se esperaba ninguna, con relación a la absolución en septiembre de 2004 de Jorge Adolfo Chávez Hernández, un ex miembro del Batallón 3-16, por el asesinato del activista ambiental y concejal municipal Carlos Antonio Luna López en 1998. A finales de año, el también sospechoso José Ángel Rosa Rosa permaneció bajo arresto acusado de otros delitos no relacionados con este caso, y los sospechosos Ítalo Iván Lemus y Marcos Morales no han sido capturados. El caso, que fue presentado por dos ONGs ante la CIDH en enero de 2004, estaba pendiente.

No hubo progreso en cuanto a la apelación presentada por el Ministerio Público en julio de 2004 por la absolución y liberación en 2003 de Jaime Ramírez Raudales, con relación al asesinato por razones políticas de los activistas sociales Miguel Ángel Pavón Salazar y Moisés Landaverde Recarte en 1988.

A finales de año, la Corte de Apelaciones no había emitido un fallo en el caso del Mayor retirado Manuel de Jesús Trejo Rosa, quien permaneció bajo arresto domiciliario por la detención ilegal e intento de asesinato contra Nelson MacKay Echevarría y Miguel Francisco Carías Medina en 1982 (ver la Sección 1.c.).

A finales de año, la Corte Suprema de Justicia no había emitido un fallo en el caso de Raymundo Alexander Hernández Santos por la detención ilegal y asesinato de Adán Avilez Fúnez y del ciudadano nicaragüense Amado Espinoza Paz en 1982.

En noviembre, el Coronel Juan Blas Salazar fue detenido por la policía por el asesinato de dos personas y por el delito de cateo ilegal en los ochentas. El caso continuaba siendo investigado a finales de año.

Durante el año, el Ministerio de Seguridad Pública reportó que 49 oficiales de policía fueron asesinados por personas desconocidas, señalando que posiblemente 18 de estos asesinatos fueron cometidos por pandilleros. Estos asesinatos incluyen la tortura, mutilación y asesinato en circunstancias sospechosas de dos oficiales de policía, una de los cuales estaba embarazada, el 6 de julio.

Los crímenes violentos continúan alentando el crecimiento de servicios de vigilancia privados que no cuentan con la autorización de las autoridades y de grupos clandestinos que patrullan vecindarios o municipios para supuestamente prevenir el crimen. Los grupos de vigilancia comunitaria, conocidos como Consejos de Seguridad Ciudadana (CSC) han sido acusados de aplicar la ley por sus propias manos. Activistas de derechos humanos continuaron declarando públicamente que, en su opinión, algunos de los CSC, así como algunas empresas de seguridad privada con enlaces con oficiales militares o policiales activos o retirados, estaban actuando como grupos de seguridad clandestinos o escuadrones de la muerte, atacando especialmente a jóvenes y a otros elementos de la sociedad, con la complicidad tácita de la policía.

Los medios de comunicación han informado que, en base a informaciones de fuentes gubernamentales, las actividades de grupos clandestinos han supuestamente ocasionado el asesinato de más de 970 personas, incluyendo delincuentes reconocidos y presuntos criminales, así como jóvenes pandilleros, niños de la calle, y de jóvenes no reconocidos como miembros de grupos criminales en los últimos 7 años (ver la Sección 5). Aproximadamente 80 personas han sido arrestadas durante los últimos 7 años en relación a estos asesinatos, 9 de las cuales han sido condenadas a prisión.

A finales de año, continuaba pendiente la investigación en relación al asesinato de César Virgilio Pinot, supuestamente cometido por guardias de seguridad de la compañía Agro Oriental en marzo de 2004.

En diciembre, el líder indígena Feliciano Pineda fue absuelto del asesinato de Juan Reyes Gómez en 2001, pero a finales de año continuaba en prisión acusado de otros cargos (ver la Sección 5).

Durante el año, la CIDH abrió un caso formal con relación a una denuncia presentada por Casa Alianza contra el gobierno en 2000 sobre la detención ilegal y el asesinato por parte de policías de cuatro jóvenes en 1995, conocido como el “caso de los cuatro puntos cardinales”. En su respuesta a la Corte en 2004, el gobierno aceptó su responsabilidad por la detención ilegal y el asesinato de los jóvenes, pero argumentó que nunca ha existido una política estatal para ordenar este tipo de asesinatos o para tolerarlos.

#### b. Desapariciones

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos. Hasta agosto, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, hubo siete secuestros para el pago de rescate, en comparación con cuatro secuestros en 2004.

#### c. Tortura y Otros Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes

A pesar que la ley prohíbe tales prácticas, hubo ocasiones en donde oficiales gubernamentales las utilizaron, incluyendo golpizas por parte de la policía y otros abusos a personas detenidas.

El 30 de julio, en el centro correccional juvenil Renacer, las autoridades detuvieron y supuestamente golpearon a Herlan Fabricio Ramírez Colindres, un pandillero de 16 años sospechoso de haber cometido varios crímenes violentos, incluyendo el asesinato del agente de la DEA Michael Markey. Aparentemente, las autoridades dejaron esposado a Ramírez por más de 24 horas. Activistas de derechos humanos protestaron por el tratamiento dado a Ramírez y a otros menores recluidos en ese mismo centro de detención.

El 30 de mayo, Gregoria Flores, una activista por los derechos de los Garífunas y coordinadora de la ONG OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) resultó herida después de haber recibido disparos en La Ceiba mientras recolectaba testimonios para presentarlos ante la CIDH en relación a unas

disputas de tierras entre comunidades Garífunas y empresarios de bienes raíces. La policía reportó que la balacera se debió a un intento de robo, pero activistas de los derechos de los indígenas no consideraron que esta fuera una explicación convincente, y continuaron presionando para que se reabriera la investigación.

Con respecto a los casos contra los acusados de detención ilegal y tortura en contra de seis estudiantes en 1982, el caso del Capitán retirado Billy Fernando Joya Améndola fue llevado a apelación a una instancia superior el 12 de abril, pero los juzgados continuaron negando las apelaciones del Ministerio Público para reestablecer una orden de captura en su contra. La apelación del Ministerio Público sobre el retiro de los cargos contra el Coronel retirado Juan Evangelista López Grijalba en 2004 continuaba pendiente. A finales de año, López Grijalba continuaba en libertad bajo fianza.

No hubo progreso en cuanto al requerimiento de la Corte Suprema de Justicia en 2004 que ordenaba a la Corte de Apelaciones a emitir un nuevo fallo en el caso del Mayor retirado Manuel de Jesús Trejo Rosa, quien fue arrestado junto a Raymundo Alexander Hernández por la detención ilegal e intento de asesinato en contra de Nelson MacKay Echevarría y Miguel Francisco Carías Medina en 1982.

#### Condiciones de las Prisiones y Centros de Detención

Las condiciones en las prisiones fueron deplorables y su seguridad fue deficiente. Grupos de derechos humanos informaron que los prisioneros sufrieron de un severo hacinamiento, desnutrición, falta de salubridad adecuada y posiblemente fueron sujetos a otro tipo de abusos, incluyendo violaciones cometidas por otros internos. En muchos casos, los prisioneros dependieron de la ayuda de visitantes del exterior para sobrevivir, debido a que el sistema de prisiones no proporcionó la alimentación adecuada o no pudo satisfacer otras necesidades básicas. La fuga de prisioneros, a través de sobornos u otros medios, continuó siendo frecuente. Herlan Fabricio Ramírez Colindres (ver la Sección 1.a.) escapó de dos prisiones distintas antes de ser encarcelado en la sección para menores del Centro Renacer el 26 de noviembre. De la población total de 11,545 prisioneros durante el año, aproximadamente 905 de ellos fueron miembros de pandillas.

Los disturbios en las prisiones, causados principalmente por las condiciones inhumanas de las penitenciarías o por la violencia entre pandillas, ocurrieron en las prisiones más grandes de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Choluteca. Durante el año, 19 pandilleros fueron asesinados en prisión, en algunos casos por miembros de otras pandillas. Casa Alianza reportó la muerte de cuatro jóvenes en las cárceles y en centros de detención juvenil. Las autoridades carcelarias intentaron colocar a los prisioneros de pandillas rivales en diferentes instalaciones para reducir las tensiones y violencia entre pandillas.

A finales de año, no se habían presentado cargos y no hubo progreso alguno en la investigación sobre el incendio en la penitenciaría de San Pedro Sula en donde murieron 107 miembros de pandillas en 2004.

No hubo novedades en los casos pendientes en contra de 51 personas acusadas de homicidio y otros crímenes en 2004 por su supuesta participación en la muerte de 68 personas en la prisión de El Porvenir, cerca de La Ceiba, en 2003.

Debido al fracaso del gobierno para asignar recursos para instalaciones alternativas, las prisiones alojaron a personas con enfermedades mentales, así como personas con tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, conjuntamente con la población general de la cárcel. Las organizaciones de derechos humanos acusaron a oficiales de prisiones de usar fuerza excesiva en contra de los internos, incluyendo golpizas, así como también aislamiento y amenazas.

A pesar que las mujeres generalmente fueron reclusas en instalaciones separadas bajo condiciones similares a las experimentadas por los hombres, las mujeres en prisión no disponen del privilegio de recibir visitas conyugales. En algunas prisiones de baja seguridad, las mujeres fueron reclusas con la población general. Los niños pudieron vivir con sus madres en la cárcel hasta la edad de dos años. Las mujeres en detención preventiva antes de su juicio fueron reclusas con prisioneras convictas.

El gobierno cuenta con centros de detención juvenil en Támara (uno para varones y otro para niñas), El Carmen (para varones) en San Pedro Sula, y Jalteva (para varones) cerca de Tegucigalpa, pero en algunas ocasiones menores de edad fueron reclusos con adultos en prisiones para adultos.

Durante el año, Casa Alianza y el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) firmaron un acuerdo para utilizar: \$52,910 (1 millón de Lempiras) para desarrollar un programa de salud mental en centros de rehabilitación juvenil, otros \$52,910 (1 millón de Lempiras) para establecer un programa de becas para reintegrar a los jóvenes a la sociedad después de su encarcelamiento o detención; y \$9,524 (180,000 Lempiras) para completar la construcción de un edificio de oficinas del IHNFA en Choluteca para el manejo de asuntos de menores en conflicto con la ley. Hasta noviembre, Casa Alianza había recibido un cheque por \$52,910 (1 millón de Lempiras) para iniciar la ejecución de estos proyectos.

No hubo progreso en las negociaciones entre el gobierno y Casa Alianza de 2004 sobre la denuncia de Casa Alianza a la CIDH con relación a cuatro menores que fueron torturados en una prisión de Comayagua en 1995.

Generalmente, el gobierno permitió visitas a las prisiones de parte de observadores independientes de derechos humanos nacionales e internacionales, y estas visitas ocurrieron durante el año.

#### d. Arresto o Detención Arbitraria

La ley prohíbe el arresto y detención arbitraria, pero las autoridades ocasionalmente no acataron estas prohibiciones.

#### Papel de la Policía y el Aparato de Seguridad

El Ministerio de Seguridad Pública supervisa las operaciones policiales, incluyendo a la Policía Preventiva, la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), la Policía de Tránsito, la Policía de Fronteras, la Policía Turística, y la Policía Penitenciaria. La policía experimentó falta de capacitación, financiamiento y personal. La corrupción fue un problema serio. El Ministerio de Seguridad Pública informó que desde 2000 hasta agosto, 186 policías habían sido procesados y 1,344 habían sido despedidos por diversas razones, desde incompetencia hasta corrupción. En general, hubo preocupación pública debido a la percepción de incapacidad de las fuerzas de seguridad de prevenir y controlar el crimen, y los ciudadanos continuaron creyendo que personal corrupto de las fuerzas de seguridad eran cómplices del alto índice de criminalidad.

Durante el año, la policía y efectivos militares continuaron patrullando las calles en forma conjunta. La violencia y la intimidación de las pandillas continuaron siendo un problema serio, y las pandillas continuaron intimidando, amenazando, y asaltando a los pasajeros del transporte público, lo que provocó que el gobierno asignara a oficiales de seguridad en muchas de las unidades del transporte público. Los responsables de asesinatos contra jóvenes y menores de edad, incluyendo en algunos casos a la policía, continuaron actuando con impunidad.

La Oficina de Asuntos Internos investiga denuncias de actividades ilegales cometidas por miembros de la policía. Tanto la Policía Preventiva como la DGIC cuentan con una Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), que realizan revisiones internas de conducta inadecuada de policías.

La ONG CODEH continuó implementando programas financiados por el gobierno para capacitar a Policías Penitenciarios para prevenir la ejecución de actos de tortura. Durante el año, oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas participaron en capacitaciones sobre derechos humanos organizadas por cooperantes internacionales.

#### Arresto y Detención

La ley estipula que la policía puede arrestar a una persona solamente con una orden judicial, a menos que el arresto se realice por orden de un fiscal, o durante la comisión de un crimen, o si existe una fuerte sospecha que una persona ha cometido un delito y que quiera intentar evadir la persecución criminal, o si es atrapado con evidencias relacionadas con la comisión de un crimen. La policía debe informar claramente a la persona sobre los motivos de su arresto. La policía debe presentar a un detenido ante una autoridad competente dentro de un plazo de 24 horas. El fiscal tiene 24 horas para decidir si existe causa probable para realizar un proceso judicial, y un juez tiene 24 horas para determinar si emite una orden de detención temporal que puede tener vigencia de hasta seis días. Durante este período, se debe realizar una audiencia preliminar para que el juez examine los motivos de causa probable y para que pueda tomar una decisión sobre si debe continuar la detención preliminar. La ley también establece que los delitos mayores son fiables, y los detenidos pueden ser visitados de inmediato por sus familiares. A pesar que la ley determina que los prisioneros deben tener acceso inmediato a un abogado de su elección, y que el Estado puede sufragar los gastos legales de los prisioneros que no puedan pagarlos, estos principios no siempre han sido implementados en la práctica.

No se conocieron informes sobre la existencia de detenidos por cuestiones políticas.

Los prolongados períodos de detención preliminar fueron un problema serio. Durante el año, aproximadamente un 63 por ciento de la población penitenciaria todavía esperaba su juicio. La ley ordena la liberación de cualquier detenido cuyo caso no haya sido llevado a juicio y cuyo tiempo de detención haya excedido el término de sentencia máxima del crimen del cual se le acusa. Debido a la ineficiencia y corrupción judicial y la falta de recursos asignados por el gobierno, muchas personas en detención preventiva han estado en prisión en términos equivalentes a la máxima condena que hubieran recibido por el crimen del cual fueron acusados. Muchos prisioneros permanecieron en la cárcel después de haber sido absueltos o de haber completado sus sentencias, debido a que los oficiales responsables no procesaron su liberación.

#### e. Negación de un Juicio Público Justo

A pesar que la ley garantiza la existencia de un Poder Judicial independiente, el sistema de justicia sufre de un déficit de financiamiento, equipo y personal, que generalmente es ineficiente y vulnerable al clientelismo, corrupción e influencias políticas.

Los bajos sueldos y la falta de controles internos provocaron que los funcionarios judiciales fueran susceptibles a sobornos, y poderosos intereses específicos continuaron ejerciendo influencia en los resultados de los juicios.

Durante el año, el 74 por ciento de los aproximadamente 221,000 casos pendientes de acuerdo a la reorganización de los procedimientos del sistema de justicia en 2004 fueron depurados. La ley establece que los casos atrasados deben ser resueltos en el 2006.

Existen 12 cortes de apelaciones, 77 cortes de primera instancia de jurisdicción general, y 330 juzgados de paz de jurisdicción limitada. La Corte Suprema nombra a todos los jueces de los tribunales de menor jerarquía. Los medios de comunicación y diversas organizaciones de sociedad civil expresaron su preocupación que la división de 8 magistrados nacionalistas y 7 liberales resultó en la politización de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

#### Procedimientos de los Juicios

La ley establece el derecho de un juicio público justo. A pesar que la ley determina que se presume la inocencia de una persona acusada, y que tiene derecho a una audiencia preliminar ante un juez, a gozar de libertad bajo fianza, a contar con asesoría legal cuando sea apropiada, a tener un abogado proporcionado por el Estado si es necesario, así como el derecho a apelar, los derechos de los acusados no siempre fueron respetados.

Aunque la ley dispone que un caso no puede continuar si el sospechoso no cuenta con representación legal, el gobierno asignó una mínima cantidad de recursos para el programa de defensores públicos. Como resultado, los defensores públicos no fueron capaces de satisfacer las demandas de asesoría legal para aquellos que no podían costear su representación.

#### Prisioneros Políticos

No hubo informes sobre la existencia de prisioneros políticos.

#### f. Interferencia Arbitraria con la Privacidad, la Familia, el Hogar, y la Correspondencia

Si bien la ley generalmente prohíbe tales acciones, una excepción legal permite que las autoridades puedan ingresar en cualquier momento en casos de emergencia o para prevenir la comisión de un delito. Continuaron existiendo denuncias fundamentadas que en algunas ocasiones las fuerzas de seguridad no obtuvieron la autorización debida antes de ingresar a un domicilio particular.

Líderes garífunas y de otros grupos indígenas continuaron denunciando que el gobierno no rectificó las acciones previas de fuerzas de seguridad públicas y privadas que desalojaron a campesinos y grupos indígenas que reclamaban la propiedad de tierras, basándose en las leyes de reforma agraria o en títulos de propiedad ancestrales (ver la Sección 5). A pesar de la aprobación de reformas al sistema de servicio civil, la membresía a un determinado partido político es generalmente necesaria para obtener o conservar un empleo en el sector público.

#### Sección 2 Respeto a las Libertades Civiles, Incluyendo:

##### a. Libertad de Expresión y de Prensa

A pesar que la ley generalmente garantiza la libertad de expresión y de prensa, a los manifestantes se les restringe el uso de expresiones que podrían incitar a las personas al desorden.

El 19 de mayo, la Corte Suprema de Justicia derogó una provisión legal que prohibía el insulto a funcionarios públicos. Algunos periodistas admitieron que practicaron auto censura cuando sus reportes amenazaron los intereses políticos o económicos de los propietarios de medios de comunicación.

Un reducido número de poderosos empresarios y magnates con intereses empresariales, políticos y familiares interconectados son dueños de la mayoría de medios de comunicación del país. El gobierno cuenta con varios mecanismos para influir en la manera cómo se reportan sus actividades, tales como permitir o denegar el acceso a funcionarios públicos. En mayo, los tres Poderes del Estado y varias organizaciones privadas continuaron con la práctica de otorgar premios, algunos acompañados con sumas sustanciales de dinero a algunos reporteros, editores, camarógrafos, fotógrafos y caricaturistas en el Día del Periodista. ONGs que monitorean la libertad de prensa los consideraron como un reconocimiento por los supuestos servicios prestados a la institución otorgante. El gobierno también tuvo una considerable influencia sobre los medios escritos, por medio de su autoridad de otorgar o negar contratos de publicidad oficial financiados con fondos públicos.

Los medios de comunicación continuaron sufriendo de corrupción interna, politización, e influencias externas. Los ministros y otros altos funcionarios gubernamentales aseguraron el silencio de la prensa mediante la contratación de periodistas como asistentes de relaciones públicas con altos salarios o pagando a periodistas para investigar o suprimir ciertos reportajes.

Cuando los medios de comunicación intentaron realizar investigaciones a fondo sobre políticos nacionales o sobre actos de corrupción, en algunas ocasiones a los periodistas se les negó el acceso a información oficial. La ONG Reporteros Sin Fronteras informó que el 15 de noviembre, los cables de energía de la estación local de radio Virtud Stereo fueron cortados con machetes por supuestos miembros del Partido Liberal, para interrumpir la transmisión de anuncios que contenían publicidad del Partido Nacional durante las elecciones generales.

El 18 de febrero, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le envió una carta al entonces presidente Maduro para solicitarle que tomara acciones inmediatas para detener las acciones hostiles contra la prensa del entonces presidente del Congreso Nacional Porfirio Lobo Sosa. La SIP criticó la utilización de la prensa por parte de Lobo Sosa como un foro público para abogar por la ley electoral. La anterior administración Maduro utilizó regularmente la Cadena Nacional para tener una disposición completa de todas las estaciones de radio y televisión para presentar discursos presidenciales. De acuerdo a la ley, los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el presidente del Tribunal Supremo Electoral, están facultados a hacer uso de la Cadena Nacional. Durante el año, el presidente del Congreso Nacional, quien también fue candidato presidencial, utilizó con frecuencia la Cadena Nacional.

Durante el año, hubo diversos reportes de amenazas o demandas legales de parte de personas poderosas contra periodistas, incluyendo acusaciones legales contra periodistas por reportar sobre casos de corrupción.

A finales de año, la apelación presentada por el periodista Renato Álvarez a la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2004 continuaba pendiente de resolución. Álvarez pretendía la anulación de su sentencia por difamación y calumnia.

En marzo de 2004, un asaltante desconocido disparó e hirió al periodista Edgardo Castro en San Pedro Sula. No hubo ningún indicio que señalara que el asalto estuviera relacionado con la condición de periodista de Castro. En el momento, la policía capturó y detuvo a dos sospechosos. A finales de año, estaba pendiente la investigación de este caso.

No hubo progreso en la investigación de las amenazas telefónicas anónimas que recibió Jhonny Lagos, director de El Libertador, un pequeño y nuevo periódico mensual independiente, y su familia en noviembre de 2004.

A finales de año, no hubo novedades, y no se esperaba ninguna, en la investigación del asesinato del periodista German Antonio Rivas en 2003.

El gobierno no restringió la libertad académica o el acceso a Internet.

#### b. Libertad de Reunión Pacífica y Asociación

##### Libertad de Reunión

La ley garantiza la libertad de reunión, y el gobierno generalmente respetó este derecho.

##### Libertad de Asociación

La ley garantiza la libertad de asociación, y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica; sin embargo, la ley de asociaciones criminales prohíbe la asociación ilícita y establece términos de prisión de entre 3 a 12 años (ver la Sección 4). Durante el año, grupos que promueven los derechos de los homosexuales expresaron su preocupación que la ley que prohíbe las asociaciones ilícitas pudiera ser utilizada para criminalizar las actividades sociales y las organizaciones de la comunidad homosexual. Durante el año, la ley que prohíbe las asociaciones ilícitas fue empleada para arrestar a individuos por ser miembros de la Mara Salvatrucha y otras pandillas.

#### c. Libertad de Religión

La ley garantiza la libertad de religión, y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica. El gobierno prohíbe la inmigración de misioneros extranjeros que practican religiones que utilicen brujería o rituales satánicos.

##### Abusos de la Sociedad y Discriminación

No se conocieron informes de discriminación o violencia contra grupos religiosos, incluyendo acciones antisemitas. La población judía consiste de aproximadamente 100 personas.

Para una discusión más detallada, vea el Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2005.

#### d. Libertad de Movimiento Dentro del País, Viajes al Exterior, Emigración y Repatriación

La ley garantiza estos derechos y el gobierno generalmente los respetó en la práctica.

La ley no prohíbe explícitamente el exilio forzado interno o internacional, pero el gobierno no utilizó esta práctica durante el año.

##### Protección de Refugiados

La ley garantiza la provisión de la condición de asilo o refugio de acuerdo con la Convención Relacionada con el Estatus de los Refugiados de la ONU de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno

ha establecido un sistema para la protección de refugiados. En la práctica, el gobierno facilitó protección contra el rechazo, el retorno de personas a un país donde temían sufrir persecución, y proporcionó el estatus de refugio y asilo. Durante el año, el gobierno aceptó el reasentamiento de ocho refugiados cubanos. El gobierno cooperó con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con la Organización Internacional para las Migraciones, y con otras organizaciones humanitarias para la asistencia a refugiados y para personas que buscaban asilo.

### Sección 3 Respeto a los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos a Renovar Su Gobierno

La ley garantiza a los ciudadanos el derecho de renovar su gobierno pacíficamente, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica por medio de elecciones periódicas, libres y justas realizadas sobre la base del sufragio universal. Los miembros activos del clero y de las fuerzas armadas y de seguridad civil no tienen derecho a votar.

#### Elecciones y Participación Política

En las elecciones nacionales de noviembre, consideradas por observadores internacionales como generalmente libres y justas, José Manuel Zelaya Rosales del Partido Liberal recibió la mayoría de votos y se convirtió en presidente electo. Los observadores percibieron irregularidades en aproximadamente 1,100 urnas, pero ningún patrón sistemático de fraude.

Algunos pastores protestantes fueron candidatos y ganaron en las elecciones primarias de febrero, pero el Tribunal Supremo Electoral anuló sus candidaturas por cuestiones técnicas con anterioridad a las elecciones generales de noviembre, y fueron reemplazados en las papeletas.

Las oportunidades para la participación de la mujer en política continuaron siendo limitadas, particularmente para aquellas que se postularon para cargos de elección popular. En el año, 32 mujeres fueron electas como diputadas en un Congreso que cuenta con 128 miembros, el número más grande de mujeres que han sido electas para el Congreso. Existían 9 mujeres de un total de 17 magistrados a la Corte Suprema de Justicia, y una de ellas era la Presidenta.

Existieron muy pocas personas de minorías étnicas o indígenas ocupando posiciones de liderazgo en el gobierno o en política. Por primera vez en la historia del país, hubo 3 Garífunas (ver la Sección 5) como diputados en un Congreso de 128 miembros, pero no hubo representación de otras minorías étnicas o comunidades indígenas.

#### Corrupción y Transparencia Gubernamental

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo estuvieron sujetos a la corrupción e influencias políticas. Durante el año, el gobierno implementó una política anticorrupción fundamentada en reformas institucionales y procesamiento de funcionarios de los sectores público y privado acusados de corrupción. Sin embargo, hubo una percepción general en la sociedad y en los observadores internacionales que las instituciones gubernamentales que combaten la corrupción no estaban dispuestas o les faltó la capacidad profesional para investigar, arrestar, y procesar a los implicados en casos de corrupción de alto nivel.

El 1 de mayo, Ramón Romero, director de Migración, fue destituido de su cargo, arrestado y acusado de varios cargos de corrupción. A finales de año, el juicio todavía estaba pendiente y Romero permaneció en arresto domiciliario.

No existieron leyes que permitieran a los ciudadanos tener acceso a la información relacionada con las operaciones o decisiones del gobierno.

#### Sección 4 Actitud del Gobierno Sobre Investigaciones Internacionales y No Gubernamentales de Supuestas Violaciones a Derechos Humanos

Una amplia variedad de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales generalmente operaron sin ninguna restricción gubernamental para investigar y publicar los resultados de sus averiguaciones sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios gubernamentales generalmente cooperaron con estos grupos y fueron receptivos a sus opiniones.

El 12 de septiembre, Juan Almendárez Bonilla, Director Ejecutivo de la ONG Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT) y candidato a la presidencia por el Partido Unificación Democrática, informó que dos hombres lo acosaron y lo intimidaron en la calle, y que posteriormente dos desconocidos lo amenazaron por teléfono a él y a su familia. El 19 de septiembre, asaltantes desconocidos intentaron ingresar a las oficinas del CPTRT en Tegucigalpa.

No hubo progreso en las investigaciones pendientes sobre el asesinato del activista de derechos humanos Marvis Guelio Pérez en abril de 2004, y sobre el asalto a José Idalecio Murillo, un líder de la Coordinadora Regional de Resistencia Popular en mayo de 2004.

El gobierno cooperó con organizaciones internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero estas organizaciones no realizaron ninguna visita al país durante el año.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), una institución gubernamental autónoma, fue dirigido por el Comisionado de Derechos Humanos Ramón Custodio López. El director del CONADEH tuvo libre acceso a todas las instituciones civiles y militares y a centros de detención, y funcionó con inmunidad total y sin la interferencia del gobierno o de los partidos políticos. En general, el gobierno cooperó con el CONADEH, pero le asignó una cantidad inadecuada de fondos y otros recursos. No hubo información disponible sobre algún informe producido por el CONADEH durante el año.

#### Sección 5 Discriminación, Abusos Sociales, y Trata de Personas

La ley prohíbe la discriminación en base a raza, sexo, discapacidad, idioma, o clase social. Sin embargo, en la práctica, las elites políticas, militares y sociales generalmente gozaron de impunidad en el sistema jurídico.

##### Mujeres

La violencia contra la mujer continuó siendo generalizada. La ley criminaliza la violencia doméstica con penas de dos a cuatro años. La ley no impone multas por violencia doméstica, y solo incluye sanciones de servicio comunitario y detención preventiva por 24 horas si el agresor es capturado en el acto. La ley establece una sentencia máxima de tres años en prisión por desobedecer una orden de restricción relacionada con un crimen de violencia intrafamiliar.

El gobierno no aplicó efectivamente la ley con relación al abuso doméstico. Durante el año, el Ministerio Público recibió 5,891 denuncias de supuesta violencia doméstica, que resultaron en 2,320 sentencias; 3,571 casos continuaron en investigación. Hubo 2,040 denuncias de supuesta violencia intrafamiliar, que

la ley considera un crimen más serio, con 1,034 casos procesados y 1,006 en investigación. Hubo 1,074 denuncias de violación, que resultaron en 466 sentencias y 608 casos en investigación.

El gobierno trabajó con CARE y otras ONGs para proporcionar capacitaciones especializadas a oficiales de policía para la aplicación de la ley relacionada con la violencia doméstica. Hubo dos instalaciones que específicamente proveían albergue físico para mujeres maltratadas. Ambos albergues fueron manejados por ONGs. El albergue en Tegucigalpa podía acomodar a 20 mujeres y a sus familias. Además, otros seis centros privados para mujeres maltratadas ofrecieron asistencia legal, médica y psicológica.

Las penas por violación son de 3 a 9 años de cárcel, y en la práctica los juzgados hicieron cumplir estas penas. Debido a que todas las violaciones son consideradas crímenes públicos, con la posible excepción de las cometidas por un cónyuge, las que son evaluadas caso por caso, un violador puede ser procesado aunque la víctima no desee presentar cargos.

Aunque la prostitución de adultos es legal y relativamente común, la ley prohíbe la promoción y facilitación de la prostitución.

Las mujeres fueron tratadas para ser explotadas sexualmente y para garantizar el pago de deudas (ver la Sección 5, Trata).

La ley prohíbe el acoso sexual en los lugares de trabajo, y establece penas de uno a tres años de prisión. El acoso sexual continuó siendo un problema, pero el gobierno no aplicó la ley de forma efectiva. A pesar que existen disposiciones legales contra tales prácticas, trabajadoras del sector de exportación de textiles continuaron reportando que fueron obligadas a realizarse pruebas de embarazo como condición para ser empleadas. La mayor parte de las mujeres que desempeñaban ocupaciones de baja calidad y posiciones informales con salarios bajos, como el trabajo doméstico, no contaban con principios o regulaciones legales de protección. Las mujeres estaban representadas en alguna proporción en la mayor parte de profesiones, pero las actitudes culturales limitaron sus oportunidades profesionales. De acuerdo a la ley, las mujeres tienen igual acceso que los hombres a oportunidades educacionales. La ley requiere que los empleadores paguen a las mujeres salarios iguales por trabajos similares, pero los empleadores usualmente consideran que los trabajos de las mujeres son menos exigentes que los de los hombres para justificar salarios más reducidos.

Mientras que las mujeres y los hombres tienen iguales derechos de acuerdo a la ley, incluyendo los derechos de propiedad en caso de divorcio, en la práctica a las mujeres se les negaron estos derechos.

El gobierno mantuvo como posición a nivel ministerial a la directora del Instituto Nacional de la Mujer, que desarrolla políticas sobre la mujer y género. Algunas ONGs trabajaron activamente sobre diversos temas relacionados con la mujer, incluyendo al Centro de Estudios de la Mujer – Honduras, el cual ha trabajado en temas de trata de personas, explotación sexual comercial, trabajadoras domésticas, y otros.

## Niños

El gobierno estuvo comprometido con los derechos y el bienestar de los niños. Sin embargo, el sistema educativo enfrentó serios problemas, incluyendo altos índices de deserción, baja matrícula en el nivel secundario, distribución desigual de los gastos del gobierno, ausentismo de los maestros, y baja calidad de la educación en las aulas de clase.

Si bien la ley garantiza una educación gratuita, universal y obligatoria hasta los 13 años, el gobierno estimó que casi 118,000 de un total de 1,146,195 niños de edades entre 6 y 11 años no recibieron ningún

tipo de educación durante el año. De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2002, el más reciente que existe, solo uno de cada dos estudiantes logró llegar al sexto grado.

Las niñas y niños tuvieron un acceso equitativo a cuidados médicos.

El abuso infantil fue un serio problema. La ley establece sentencias de prisión de hasta 3 años para personas condenadas por abuso a menores. El Ministerio Público recibió 646 denuncias de supuestos delitos contra menores, incluyendo el abuso de niños, con 183 casos procesados y 463 casos en investigación a finales de año.

La trata de niños para la explotación sexual comercial y la prostitución infantil fueron problemas (ver la Sección 5, Trata).

El trabajo infantil fue un problema (ver la Sección 6.d.).

El gobierno fue incapaz de mejorar las condiciones de vida o reducir el número de niños y jóvenes en la calle. El gobierno y organizaciones para la defensa de los derechos de los niños estimaron que durante el año hubo unos 20,000 niños en la calle, y solo la mitad de los ellos tuvo acceso a albergues. Muchos niños en la calle fueron abusados o explotados sexualmente. Las autoridades municipales de Tegucigalpa administraron 12 albergues temporales, con una capacidad total para 240 niños. La ONG Casa Alianza manejó 3 refugios para 160 niños, 1 para víctimas de explotación sexual comercial, 1 para niños en la calle y 1 para menores con problemas de abuso de sustancias como el alcohol o las drogas.

El abuso de jóvenes y niños en barrios pobres y en pandillas continuó siendo un problema serio. La violencia y la privación de las necesidades fundamentales fueron un problema constante. Miembros de la policía y personas particulares participaron en acciones violentas contra jóvenes y niños pobres (ver Secciones 1.a. y 1.c.). Grupos de derechos humanos afirmaron que algunos miembros de las fuerzas de seguridad colaboraron con grupos civiles (incluyendo grupos clandestinos) y usaron fuerza letal no justificada contra supuestos criminales reconocidos o contra personas sospechosas de pertenecer a pandillas, así como contra otros jóvenes no reconocidos por estar involucrados en actividades criminales. Durante el año, informes de medios de comunicación señalaron que 431 niños y jóvenes (menores de 23 años) fueron asesinados. Casa Alianza señaló una posible participación de policías en algunos de estos incidentes.

Varios grupos y familiares de las víctimas demandaron la investigación de incidentes específicos, mientras que otros afirmaron haber facilitado a fiscales evidencias de colusión entre miembros de la policía y líderes empresariales. El Ministerio de Seguridad Pública reconoció que algunos oficiales de policía habían sido investigados por su participación en asesinatos de niños en la calle. A finales de año, ONGs internacionales, incluyendo a CARE y otros donantes internacionales, han proveído capacitaciones sobre violencia doméstica y otros problemas de derechos humanos para miembros de la policía y de las fuerzas armadas.

Desde julio de 2003 hasta diciembre, la Unidad de Investigación Especial sobre Asesinatos de Menores había recibido 980 casos, 190 de los cuales fueron remitidos al Ministerio Público para ser procesados y los 790 restantes estaban bajo investigación. De los 190 casos remitidos al Ministerio Público, se estimaba que pandilleros eran responsables de al menos el 44 por ciento de los casos, personas particulares del 44 por ciento, y la policía u otros oficiales del gobierno del 12 por ciento.

La ley prohíbe la asociación ilícita, incluyendo la membresía a pandillas y bandas del crimen organizado, y prescribe términos de prisión de 3 a 12 años, dependiendo del nivel de participación y jerarquía de la

persona. Hasta noviembre, 364 personas habían sido detenidas por asociación ilícita. Organizaciones de derechos humanos continuaron criticando esta ley y su aplicación. Estadísticas hasta finales de año indicaban que había aproximadamente unas 30,000 a 40,000 personas, muchos de ellos menores de edad, que pertenecían a pandillas en el país. Su membresía está principalmente concentrada en las áreas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La Mara Salvatrucha (MS 13) y la Mara 18 son las pandillas más grandes y violentas, y agrupan a casi el 40 por ciento de la membresía de pandillas en todo el país.

#### Trata de Personas

Honduras fue un país de origen y tránsito para la trata de personas. Además hubo trata de personas dentro del país.

Aunque no existe una ley comprensiva contra la trata de personas, diversas provisiones en estatutos penales, de explotación de niños y de inmigración, criminalizan la trata de personas y permiten que el gobierno procese a los responsables de la trata. La ley establece sentencias de entre seis a nueve años de prisión. Las penas aumentan si el responsable es empleado público o del gobierno, o si la víctima pierde su libertad o fallece.

La entidad gubernamental denominada Dirección General de Población y Migración fue la responsable de aplicar las leyes inmigratorias del país, aunque no está autorizada a realizar arrestos. Muchas de las medidas gubernamentales anti trata se enfocan en el contexto del combate al movimiento ilegal de migrantes. La corrupción, la falta de asignación de recursos gubernamentales y de personal, y las debilidades administrativas de la policía y del sistema de justicia han entorpecido los esfuerzos de aplicación de la ley. Hubo 13 fiscales en Tegucigalpa, 5 en San Pedro Sula, y 2 en La Ceiba que formaron parte de la Oficina de la Fiscalía Especial para la Niñez, además de 8 investigadores especializados en abuso a menores en Tegucigalpa, 4 de los cuales se enfocaron en la explotación sexual y comercial de menores. Algunos funcionarios fueron investigados y despedidos por casos de corrupción.

El 20 de enero, 3 de los 10 miembros de una banda internacional dedicada a la trata de personas que engañaba a mujeres que después eran sujetas a explotación sexual comercial en el exterior fueron arrestados en el país. Los otros 7 miembros de la banda fueron arrestados en EE.UU., y 2 de ellos se declararon culpables, uno por encubrimiento y el otro por trata de personas. El juicio en EE.UU. fue postergado para 2006. A finales de año, las tres personas que fueron detenidas en el país todavía esperaban la realización de su audiencia preliminar. También hubo una orden de arresto vigente contra la persona que facilitó a las mujeres para la operación de trata.

El 28 de mayo, la policía rescató a cuatro niñas y arrestó a tres personas acusadas de trata de niñas hacia Guatemala. La investigación que condujo a los arrestos inició cuando los padres denunciaron ante la policía la desaparición de sus hijas. A finales de año, la Fiscalía Especial para la Niñez del Ministerio Público estaba trabajando en el caso.

A finales de año, María Isabel Cruz Zamora, quien fue sentenciada por tráfico y trata de personas en octubre de 2004, todavía no había sido capturada y existía una orden de arresto en su contra.

El 23 de febrero, un juzgado sentenció a seis años de prisión a dos personas acusadas de trata agravada para la explotación sexual, a una persona a 24 años de prisión por lavado de dinero, y dos ancianos fueron liberados por carecer de evidencias suficientes. Los acusados eran miembros de una familia que se dedicaba a la trata de personas en Tocoa, quienes habían sido arrestados en 2003 por el delito de trata.

A finales de año, el Ministerio Público estimó que se habían logrado 14 sentencias y aproximadamente había 50 casos pendientes de explotación sexual comercial, incluyendo 8 casos que ya tenían fecha de juicio, 3 que esperaban audiencia preliminar, y 7 casos en investigación.

Durante el año, el gobierno cooperó con los gobiernos norteamericanos, de México, Guatemala y Belice, para identificar y repatriar a menores de edad. En agosto, el gobierno se reunió en Copán con instituciones gubernamentales de Nicaragua y Guatemala y ONGs, para concertar estrategias de cooperación regional contra la trata y la explotación sexual comercial. La Oficina de la Fiscalía Especial para la Niñez trabajó con su contraparte de Guatemala para localizar y repatriar a menores víctimas de trata.

Mujeres y niños fueron tratados hacia Guatemala y también internamente, generalmente desde zonas rurales a urbanas. La explotación sexual comercial de menores fue un problema serio. Hasta octubre, Casa Alianza informó que había aproximadamente 10,000 niños que eran víctimas de alguna forma de explotación sexual comercial. La Oficina de la Fiscalía Especial para la Niñez realizó 30 operativos conjuntos con la policía, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), jueces y Casa Alianza, para rescatar a víctimas, y arrestar y procesar a los responsables de la explotación de menores.

La mayor parte de las víctimas de trata fueron mujeres jóvenes y niñas, quienes fueron tratadas hacia Guatemala, Belice, El Salvador, México, Estados Unidos y Canadá para ser explotadas sexual y laboralmente. Se aseveró que los tratantes eran primordialmente hondureños, pero también fueron implicados guatemaltecos, mexicanos, y en algunos casos chinos o taiwaneses. En la mayoría de ocasiones, los tratantes se hacían pasar como *coyotes* (traficantes de emigrantes), asegurando que podían facilitar el cruce de fronteras y ayudar a los emigrantes a ingresar a otros países centroamericanos, a México o a EE.UU. En algunos casos, a las víctimas se les prometieron empleos lucrativos, pero en lugar de ello fueron forzados a la explotación sexual comercial, al tráfico de drogas, o fueron retenidos para garantizar el pago de deudas.

El gobierno, en coordinación con UNICEF, realizó 10 campañas de información pública contra la trata de personas y la explotación sexual comercial, e informó a la población sobre los derechos de los niños y las mujeres, y los riesgos asociados con la migración ilegal.

El gobierno y Casa Alianza, además de otras ONGs, organizaron 17 seminarios de capacitación sobre la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños y de la trata de mujeres y niños. Por medio de estos seminarios, el Ministerio Público capacitó a un total de 740 operadores de justicia.

El gobierno no proporcionó asistencia alguna a extranjeros víctimas de trata, ni tampoco proveyó financiamiento a ONGs que asisten a estas víctimas. El IHNFA fue el responsable de atender a los menores que fueron repatriados al país.

#### Personas con Limitaciones Físicas

La ley no requiere la facilitación de acceso a edificios para personas con limitaciones físicas, y no existen principios o estatutos generales para la protección de personas con limitaciones físicas o mentales, excepto que es ilegal que un empleador discrimine a un trabajador como consecuencia de una limitación. Durante el año, no hubo informes de discriminación en contra de personas con limitaciones físicas para acceder a empleo, educación, servicios de salud, o para la provisión de otros servicios del Estado. El Ministerio Público fue el responsable de la protección de los derechos de las personas con limitaciones.

#### Pueblos Indígenas

Unas 612,000 personas, que constituyen el 9 por ciento de la población total, fueron miembros de grupos indígenas o de otras etnias. Estos pobladores, que incluyen a los Miskitos, Tawahkas, Pech, Tolupanes, Lencas, Chortís, Nahual, Isleños y Garífunas, vivieron en 362 comunidades y generalmente cuentan con poco o ningún poder político para tomar decisiones que afectan a sus propiedades, cultura, tradiciones, y el manejo de sus recursos naturales.

La mayor parte de los títulos de las propiedades indígenas son comunitarios, estableciendo derechos de utilización de las tierras a determinados miembros del grupo étnico. Usualmente, la definición de las propiedades indígenas es confusa, y se ha hecho en base a documentos que datan de hasta mediados del siglo XIX. La falta de títulos de propiedad claros a menudo ocasionó invasiones y conflictos con campesinos no indígenas sin tierra y con poderosas elites empresariales e instituciones gubernamentales interesadas en explotar las costas, bosques, y otras tierras que han sido tradicionalmente ocupadas o utilizadas por grupos indígenas o de otras etnias. Tanto las comunidades indígenas como las no indígenas criticaron la supuesta complicidad del gobierno para la explotación de la madera y de otros recursos naturales en estas tierras.

Hasta finales de año, hubo varias protestas por parte de grupos indígenas con relación a disputas de tierras y una percepción de discriminación gubernamental. El 7 de junio y el 15 de septiembre, el Consejo Nacional Indígena Maya Chortí, un grupo para la defensa de los derechos de los Chortí, se tomó las instalaciones de las Ruinas Mayas de Copán y organizó protestas para presionar a la administración Maduro a cumplir con los compromisos que había adquirido el gobierno en 1997 de comprar tierras y transferir los títulos de propiedad a la comunidad Chortí. Aunque el entonces presidente Maduro se comprometió públicamente a cumplir la promesa del gobierno, a finales de año la comunidad Chortí todavía estaba esperando la compra y la transferencia de las tierras en disputa.

Líderes Garífunas también continuaron requiriendo al gobierno sobre sus preocupaciones con relación a la ejecución de enormes proyectos de desarrollo comercial que se realizan en tierras costeras que han sido tradicionalmente ocupadas y utilizadas por sus comunidades. El gobierno permitió el desarrollo de proyectos turísticos de compañías nacionales e internacionales en las tierras en disputa, utilizando contratos de arrendamiento por 100 años, señalando que estas tierras serían propiedad de los Garífunas cuando expire este período. Durante el año, líderes Garífunas informaron que fueron víctimas de acoso, amenazas, y asaltos, incluyendo el sospechoso incidente en donde una de sus voceros fue herida (ver la Sección 1.c.). Muchos activistas por los derechos de los Garífunas continuaron oponiéndose a los intentos del gobierno de facilitar títulos de tierras individuales a miembros de la comunidad en terrenos que tradicionalmente fueron propiedad de las comunidades Garífunas.

El gobierno realizó esfuerzos mínimos para trabajar con los grupos indígenas para discutir sobre sus preocupaciones en relación a la tenencia y el uso de sus propiedades ancestrales.

En general, los tribunales niegan recursos legales a grupos indígenas, y frecuentemente favorecen a las partes no indígenas que cuentan con recursos e influencia. La falta de resarcimiento legal habitualmente ocasiona que los grupos indígenas intenten recuperar sus tierras por medio de invasiones a la propiedad privada, lo que normalmente provoca que las autoridades tomen represalias a través de la fuerza.

Organizaciones de derechos humanos, incluyendo a Amnistía Internacional, continuaron presentando denuncias sobre los abusos, las golpizas de parte de la policía, y la negación de cuidados médicos adecuados a los hermanos indígenas Marcelino Miranda Mendoza y Leonardo Miranda Mendoza, miembros del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH). Estos hermanos, encarcelados en 2003, posteriormente fueron condenados, y en el mismo año fueron sentenciados a 29 años de cárcel por el asesinato de Juan Reyes Gómez en 2001. En 2003, la Corte Suprema anuló la

sentencia por el asesinato de Gómez, y ordenó a la corte de apelaciones que reconsiderara el caso. Sin embargo, los dos hermanos indígenas continúan en prisión, y no hubo progreso en este caso a finales de año. El 6 de junio, el líder indígena Feliciano Pineda fue arrestado por su vinculación con el asesinato de Juan Reyes Gómez en 2001. En diciembre, Pineda fue absuelto, pero permaneció en prisión acusado de otros cargos, incluyendo robo, daños e invasión a la propiedad supuestamente relacionados con este asesinato (ver la Sección 1.a.).

### Otros Abusos Sociales y Discriminación

La discriminación en el empleo por cuestiones de edad fue un serio problema. No hubo leyes discriminatorias fundamentadas en la orientación sexual, pero en la práctica, la discriminación social contra las personas en base a su orientación sexual fue habitual. Representantes de ONGs que trabajan por los derechos de diversidad sexual, como el Colectivo Violeta, la Comunidad Gay de San Pedro Sula, Kukulcán, y el Colectivo de Trabajadores Sexuales Travesti de San Pedro Sula afirmaron que sus miembros regularmente experimentaron abusos, golpizas, asesinatos (ver la Sección 1.a.) y otros tipos de maltrato físico y verbal de parte de las autoridades. También señalaron que existió discriminación en contra de los homosexuales por parte de las fuerzas de seguridad y de instituciones gubernamentales, y que los empleadores utilizaron prácticas discriminatorias ilegales para la contratación de personal. Estos grupos también informaron que debido a intimidaciones, temor a represalias, y corrupción policial, los homosexuales y lesbianas víctimas de abuso se negaban a presentar cargos o a proceder con sus casos.

La ONG Red de Hombres Gay Positivos indicó que los empleadores usualmente violaban las leyes antidiscriminatorias de empleo, utilizando exámenes para supuestamente detectar la sífilis entre sus empleados y solicitantes de empleo como un método para realizar pruebas de VIH para descartar a las personas que resultaran positivas. La ONG también afirmó que algunas iglesias protestantes contribuían con las actitudes prejuiciosas hacia las personas con VIH positivo.

## Sección 6 Derechos de los Trabajadores

### a. El Derecho de Asociación

La ley garantiza el derecho de los trabajadores a formar y a asociarse en sindicatos, y los trabajadores ejercieron este derecho en la práctica. Por ley, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía se les prohíbe organizar sindicatos. La ley también prohíbe que los empleados públicos presenten peticiones para la formación de sindicatos o de participar en negociaciones colectivas. De acuerdo a estadísticas de julio del Ministerio de Trabajo, aproximadamente el 8 por ciento de la fuerza laboral, con excepción del sector agrícola, y casi un 13 por ciento de los 133,000 empleados de la maquila están sindicalizados.

La ley prohíbe que existan más de dos sindicatos en una sola empresa, determina que un sindicato debe estar constituido por al menos 30 trabajadores, prohíbe que ciudadanos extranjeros sean dirigentes de un sindicato, establece que los dirigentes del sindicato deben estar empleados en la actividad productiva de la empresa que el sindicato representa, y restringe la formación de sindicatos en empresas agrícolas con menos de 10 empleados.

Diversas compañías privadas han continuado con la organización de asociaciones solidarias, que facilitan créditos y otros servicios a los trabajadores que son miembros de estas asociaciones. Representantes de grupos de trabajadores organizados han criticado a estas asociaciones, argumentando que no permiten la realización de huelgas, que no cuentan con los procedimientos adecuados para la presentación de quejas, que están diseñadas para desplazar a los sindicatos genuinos e independientes, y que son dominadas por los empleadores.

A pesar que la ley prohíbe que los empleadores provean remuneración por actividades sindicales, ésta fue una práctica común, y algunos empleadores han amenazado con cerrar empresas en donde se han organizado sindicatos, y han intimidado o despedido a trabajadores que intentaban sindicalizarse. Algunas compañías extranjeras han cerrado sus operaciones cuando han recibido notificación que sus trabajadores pretendían organizar un sindicato.

El Ministerio de Trabajo puede tomar determinaciones administrativas sobre denuncias de despidos injustificados y establecer multas a las empresas, pero solamente un tribunal de justicia puede ordenar la restitución de un trabajador. Si un tribunal ordena a un empleador que restituya a los trabajadores que han sido despedidos por participar en actividades sindicales, por ley, la empresa o el empleador está obligado a cumplir con esta determinación. Sin embargo, en la práctica, la restitución de trabajadores fue un serio problema, y generalmente los empleadores no respetaron la decisión de los juzgados de restituir a los empleados.

Aunque la ley prohíbe la elaboración de listas negras, hubo evidencia creíble que esto se ha dado en las compañías maquiladoras. Algunos trabajadores de maquila que supuestamente habían sido despedidos por participar en actividades sindicales reportaron haber sido contratados por otras empresas, y posteriormente ser despedidos sin ninguna justificación después de una o dos semanas. Empleados de maquilas informaron que han tenido acceso a antecedentes laborales que incluían la participación previa en sindicatos. Algunos empleadores han informado a trabajadores previamente sindicalizados que no pueden ser contratados debido a su anterior participación en actividades sindicales.

El Ministerio del Trabajo no siempre ha tenido capacidad de proveer una protección efectiva a los organizadores de sindicatos, debido a la corrupción y a la conducta irregular de los inspectores, incluyendo la venta de nombres de empleados que participan en la formación de sindicatos a las autoridades de las empresas antes que el gobierno reconozca oficialmente al sindicato.

Más de 30 obreros de la maquila afirmaron que recibieron una advertencia de la administración y que posteriormente fueron despedidos por intentar organizar un sindicato en la compañía Olga de Villanueva el 23 de febrero. De acuerdo a información del Ministerio de Trabajo, los empleados fueron reubicados por la administración en la compañía Hamlet Manufacturing el 16 de junio. Los empleados presentaron una denuncia ante la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras y ante el Ministerio de Trabajo. A finales de año, el caso estaba siendo investigado por el Ministerio de Trabajo.

#### b. El Derecho de Organización y Negociación Colectiva

La ley garantiza los derechos de organización y negociación colectiva, y en la práctica, el gobierno protegió este derecho. Aunque la ley establece que un empleador debe comenzar a negociar colectivamente cuando los trabajadores han organizado un sindicato, generalmente los empleadores se rehúsan a negociar con un sindicato.

La ley garantiza el derecho a huelga, y en la práctica, los trabajadores ejercieron este derecho. Sin embargo, la ley prohíbe las huelgas en un amplio rango de actividades económicas que son consideradas como servicios esenciales, y en otras que en opinión del gobierno restringen los derechos individuales a la seguridad, salud, educación, y vida económica o social. Los servicios esenciales identificados incluyen el transporte aéreo y acuático, producción de energía eléctrica, telecomunicaciones, hospitales y clínicas, servicios de limpieza y recolección de desechos, producción de necesidades primarias que afectan los servicios públicos, asociaciones sociales y caritativas, higiene de plantas y animales y la investigación científica de enfermedades, así como la producción, refinamiento, transporte y distribución de petróleo.

La OIT ha criticado las restricciones de la ley del derecho a huelga para los trabajadores del sector petróleo y para todos los empleados gubernamentales, a excepción de aquellos que trabajan en las instituciones autónomas del Estado. En algunos casos, los empleados públicos han participado en paros laborales ilegales sin experimentar represalias. Sin embargo, en estos casos, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de declarar ilegales tales protestas a petición del empleador o de la entidad administradora de servicios del sector público, y de despedir a los manifestantes. Existen las siguientes restricciones legales con respecto a las huelgas: las federaciones y confederaciones sindicales no tienen permitido la convocatoria a huelga, y se requiere una mayoría de dos terceras partes de los votos de la totalidad de miembros de la organización sindical para convocar a una huelga, en lugar de mayoría simple.

Las mismas regulaciones laborales son aplicadas en las zonas de procesamiento de exportaciones (ZPE), así como en el resto de empresas privadas, con la excepción que la ley establece restricciones adicionales para realizar huelgas en las ZPE. Hubo unas 44 zonas libres en el país, y 18 parques industriales funcionando como ZPE. 26 compañías adicionales tenían sus propias zonas libres, fuera de los parques industriales. En ausencia de sindicatos y negociaciones colectivas, varias empresas en las ZPE crearon asociaciones solidarias que, hasta cierto grado, funcionaron como sindicatos con el propósito de determinar salarios y negociar condiciones laborales. Otras compañías en las ZPE utilizaron el salario mínimo para establecer los niveles iniciales de salarios y ajustar las escalas salariales en las negociaciones con grupos similares de obreros de planta y otros empleados, en base a su antigüedad, habilidades, categorías de trabajo, y otros criterios.

#### c. Prohibición de Trabajos Forzados o Esclavizantes

Aunque la ley generalmente prohíbe los trabajos forzados o esclavizantes, incluyendo aquellos realizados por menores, permite el trabajo forzado para los criminales convictos. Además, existieron testimonios creíbles sobre la obligatoriedad de labores en horarios extra en empresas maquiladoras, particularmente para mujeres, que componen aproximadamente el 65 por ciento de la fuerza laboral en ese sector.

#### d. Prohibición del Trabajo Infantil y la Edad Mínima para Trabajar

La ley regula el trabajo infantil y establece que los niños menores de 16 años o los estudiantes mayores de 16 años no pueden trabajar, a menos que las autoridades determinen que su trabajo es indispensable para los ingresos de la familia y que el trabajo no interferirá con su educación. La Constitución establece que el número máximo de horas de trabajo para un niño menor de 17 años es de 6 horas diarias y 30 horas semanales. Por ley, los padres o guardianes legales pueden solicitar un permiso especial del Ministerio de Trabajo para permitir que niños entre las edades de 14 y 15 años trabajen, siempre y cuando el Ministerio realice un estudio de hogar para asegurarse que el menor demuestre la necesidad de trabajar, y que el niño no vaya a trabajar fuera del país o en condiciones peligrosas, incluyendo la pesca en mar adentro. En la práctica, el Ministerio de Trabajo realizó sólo un limitado número de estudios de hogar.

La ley prohíbe realizar labores nocturnas y horas extras para menores de 16 años, y requiere que los empleadores que tienen más de 20 niños en edad escolar trabajando en su negocio proporcionen un lugar para una escuela. En la práctica, la gran mayoría de niños trabajaron sin contar con un permiso del Ministerio.

El Ministerio del Trabajo no aplicó de forma efectiva las leyes relativas al trabajo infantil fuera del sector maquila, y ocurrieron frecuentes violaciones de las leyes sobre trabajo infantil en tareas agrícolas familiares, en el sector agrícola de exportación, incluyendo las industrias del melón, café y caña de

azúcar, y en empresas de servicios y comercio a pequeña escala. Muchos niños trabajaron para satisfacer sus necesidades económicas junto con otros miembros de sus familias.

Un estudio realizado en 2004 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), administrado por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT concluyó que aproximadamente 359,752 niños, que constituyen el 14 por ciento de los niños entre las edades de 5 y 18 años, trabajaban ya sea medio tiempo o a tiempo completo. Muchos adolescentes entre 13 y 18 años trabajaban como pescadores submarinos de langostas sin contar con ningún dispositivo de seguridad y sin protección médica. Los niños que trabajaban en granjas de melón y caña de azúcar estaban expuestos a pesticidas y a largas horas de trabajo. Aunque los crematorios estaban legalmente prohibidos para los niños, hubo gran cantidad de menores que trabajaban en estos lugares.

Casa Alianza realizó un estudio en 20 ciudades del país, y encontró que 10,000 niños fueron víctimas de crímenes de explotación sexual comercial o de trata de personas (ver la Sección 5).

Se dieron casos aislados de menores por debajo de la edad legal que trabajaron en el sector maquila. En algunos casos, menores de edad obtuvieron permisos de trabajo de forma fraudulenta o compraron permisos falsificados.

El Ministerio del Trabajo continuó con una campaña para ampliar el conocimiento de las empresas sobre las peores formas de trabajo infantil. El programa IPEC identificó las peores formas de trabajo infantil en el país, siendo éstas la explotación sexual comercial, particularmente en las áreas turísticas a lo largo de la Costa Norte, la producción de fuegos artificiales, la pesca submarina de langostas en mar adentro desde barcos langosteros comerciales, la extracción de piedra caliza y en minas de cal, la recolección de basura en los crematorios, en granjas de melón y la producción agrícola comercial que implica el manejo de pesticidas, corte de madera en aserraderos, y actividades de construcción.

A finales de año, el gobierno había iniciado varios programas sociales y educativos enfocados a los niños en riesgo, incluyendo un programa de becas escolares del Ministerio de Educación para proveer dinero para adquirir útiles escolares para familias muy pobres, y un programa de escolaridad alternativo a través de la radio y educación a distancia para niños en áreas rurales distantes que cuentan con pocas escuelas. Los esfuerzos del gobierno tuvieron un mínimo impacto en la reducción del trabajo infantil tomando en cuenta la pobreza extrema, las condiciones de hambruna en las áreas rurales, y la falta de empleos para los graduados del sistema educativo.

#### e. Condiciones Aceptables de Trabajo

La escala del salario mínimo diario, la cual fue actualizada durante el año, está clasificada por sector y por el tamaño de la empresa: pequeñas (de 1 a 15 trabajadores) y grandes (de 16 o más trabajadores). Esta escala varía de \$3.24 (61.30 Lempiras) para trabajadores agrícolas en pequeñas empresas a \$5.17 (97.80 Lempiras) para trabajadores de compañías financieras y de seguros, y trabajadores de empresas orientadas a la exportación, incluyendo las maquilas y las empresas agrícolas comerciales de tabaco, café, banano y mariscos. Los trabajadores de otras áreas como la construcción, servicios, minería, transporte, comunicaciones, etc., cuentan con un salario mínimo dentro del rango de estas dos cifras. El salario mínimo fue insuficiente para proveer un estilo de vida apropiado para el trabajador y su familia. El Ministerio de Trabajo y la Comisión del Salario Mínimo fueron los responsables de la aplicación del salario mínimo.

La ley establece una semana de trabajo de 44 horas máximo, y al menos un período de 24 horas de descanso por cada 6 días de trabajo. La ley requiere el pago de horas extras por el trabajo realizado

después de las horas establecidas, y existen prohibiciones sobre la obligatoriedad y la excesiva imposición de horas extras. Los empleadores frecuentemente ignoraron estas regulaciones debido al alto nivel de desempleo y subempleo, y la falta de una efectiva aplicación de la ley por parte del Ministerio de Trabajo. Los trabajadores extranjeros gozaron de igual protección bajo la ley, aunque el proceso de trámite de un permiso de trabajo para un extranjero en el Ministerio del Trabajo fue engorroso.

El Ministerio de Trabajo fue el responsable de asegurar el cumplimiento de las leyes nacionales de salud y seguridad ocupacional, pero no lo hizo de forma consistente o efectiva. Las normas de seguridad para los trabajadores no fueron observadas apropiadamente, particularmente en la industria de la construcción y en las actividades de producción agrícola. Hubo algunas denuncias que extranjeros administradores de compañías en ZPE y otras instalaciones industriales privadas no cumplieron con las normas de salud y seguridad ocupacional (ver la Sección 6.b.). Trabajadores en la producción de piñas y de otras empresas agrícolas comerciales afirmaron que los empleadores los incluían en listas negras si presentaban denuncias ante las autoridades sobre sus condiciones de trabajo. Durante el año, el Ministerio de Trabajo organizó capacitaciones para sus inspectores de trabajo para integrar y unificar sus capacidades de inspección. El Ministerio también realizó en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras un taller de asistencia técnica para la prevención de riesgos en el lugar de trabajo que capacitó a 24 inspectores.

La ONG Asociación de Buzos Lisiados de la Moskitia presentó un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presionar al gobierno a cumplir con un acuerdo con la asociación de julio de 2004 que obligaba a los empleadores a crear mejores condiciones de trabajo para los buzos, incluyendo el uso de equipo de buceo adecuado para minimizar la alta incidencia de graves discapacidades y muerte entre los buzos.

La ley no garantiza a los trabajadores el derecho de retirarse de una situación peligrosa en su trabajo sin que ello ponga en riesgo su continuidad laboral.